



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-010(024)-2018-00013-01
Demandante: Luis Miguel Pérez Rueda
Demandado: Porvenir S.A., Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S. y Fabio Guzmán Echeverri
Asunto: Apelación
Procedencia: Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Pensión de invalidez, aportes pagados extemporáneamente

Medellín, enero treinta y uno (31) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por la codemandada Porvenir S.A., respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor LUIS MIGUEL PÉREZ RUEDA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR S.A., INVERSIONES INMOBILIARIAS REFORMANDO Y ALQUILANDO S.A.S. y FABIO GUZMÁN ECHEVERRI, Radicado 05001-31-05-010(024)-2018-00013-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor LUIS MIGUEL PÉREZ RUEDA, convocó a juicio a PORVENIR S.A., INVERSIONES INMOBILIARIAS REFORMANDO Y ALQUILANDO S.A.S. y FABIO GUZMÁN ECHEVERRI, pretendiendo se condene a la primera al pago a Porvenir S.A., de los aportes para pensión; se ordene a Porvenir S.A., adicione dentro de la historia laboral el periodo de diciembre del año 2016, que fue cancelado en abril de 2017, mediante la planilla del SOI No. 7659302515; se condene a Porvenir S.A., a incluir en la nómina de pensionados por invalidez al demandante, reconociendo la prestación a partir del 16 de mayo de 2017, fecha de estructuración de la invalidez, con los intereses moratorios, a partir del 12 de febrero de 2018 y hasta el momento del pago.

En respaldo de tales pedimentos se expuso que el señor Luis Miguel Pérez Rueda inició cotizaciones a pensión desde febrero del 2015, laborando a partir del 1º de febrero del 2016 para Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S., como ayudante de técnico de mantenimiento de aire acondicionado, sobreviniéndole una enfermedad de origen común, denominada “encefalitis viral, encefalitis aguda diseminada, síndrome de Guillain-Barré y polineuropatía inflamatoria”, cuyo diagnóstico es altamente degenerativo y progresivo, siendo hospitalizado por los meses de mayo, junio y julio del 2016.

Narra que el actor solicitó la calificación a Porvenir S.A., siendo remitido a Seguros de Vida Alfa S.A., la cual, mediante dictamen No. 3156794 del 13 de septiembre del 2017, determinó una pérdida de la capacidad laboral del 73.12%, de origen común, estructurada el 16 de mayo del 2017, por lo que el 12 de octubre del 2017 solicitó la pensión de invalidez, la misma que le fue negada por comunicado del 20 de octubre del 2017, argumentándose que no cumple con las 50 semanas de cotizaciones exigidas por la ley, lo que lo llevó a entablar tutela en contra de su empleador Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S. y de la EPS, resolviendo el Juzgado Primero Promiscuo de Oralidad de Caldas Antioquia lo relacionado con el problema con la EPS, y en cuanto a los aportes determinó que sería un asunto a resolver por parte de la jurisdicción ordinaria.

Expone que de acuerdo a la historia consolidada de Porvenir S.A., generada el 12 de octubre del 2017, el reclamante inició cotizaciones en febrero del 2015, de manera interrumpida, hasta febrero del 2017, bajo el supuesto de haber acumulado solo 46 semanas, observándose que no se realizó el pago por parte de Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S. del mes de mayo del 2016, por lo que, si a las 46 semanas reportadas en la historia laboral, se le adicionan las 4.29 del mes de mayo del 2016, contaría el afiliado con 50.29 semanas; adicionalmente, de la planilla del SOI se extrae que el 11 de abril del 2017 se pagó a Porvenir S.A. los meses de diciembre del 2016, enero y febrero del 2017, pero en la historia generada el 12 de octubre del 2018 solo aparecen los meses de enero y febrero del 2017, faltando por incluir diciembre del 2016, alcanzando el actor 54.58 semanas cotizadas. También debe incluirse las 4.29 semanas del mes de marzo del 2017, canceladas el 20 de octubre de la misma anualidad, contando el reclamante con 58.87 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Explica, además, que, desde su último año de cotización reportado en la historia del 12 de octubre del 2017, se tiene que entre junio del 2016 y febrero del 2017 el actor acumuló 25.71 semanas y conforme al artículo 39 de la Ley

100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 del 2003 parágrafo 1°, en este tipo de casos se debe aplicar las 26 semanas.

Aduce que, conforme a los análisis anteriores, el demandante instauró nueva acción de tutela en contra de la AFP, solicitando se le otorgue la pensión de invalidez y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caldas Antioquia, mediante sentencia del 4 de diciembre del 2017, declara improcedente el amparo solicitado. Agrega que el Juez de tutela vinculó al señor Fabio Guzmán, ya que en voces de Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S., es el verdadero empleador del actor, persona que guardó silencio dentro del trámite constitucional.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **PORVENIR S.A.**, indicó que, según la relación de aportes que se allega, el demandante cotizó con la empresa Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S. de manera interrumpida, realizándose los pagos a favor del mismo, de manera extemporánea, sin efectuar cotizaciones por el mes de mayo del 2016 y en cuanto al ciclo de junio del 2016, se hizo extemporáneamente, recibándose el pago el 9 de septiembre del 2016; los ciclos de enero y febrero del 2017 también fueron cancelados de manera tardía, no siendo cierto que su representada no hubiere tenido en cuenta el mes de diciembre del 2016, ya que en la relación de aportes, solo se incluyen los ciclos que son efectivamente reportados, ateniéndose en este punto, a lo probado en el proceso.

En cuanto a que el derecho se podría reconocer por cuanto el actor cuenta con 26 semanas de cotizaciones en el año anterior a la estructuración de la invalidez, debe tenerse en cuenta que tal y como se indicó en la demanda, el reclamante tiene 21 años, no siéndole aplicable el parágrafo de la disposición citada, sin que el mismo tampoco con las 26 semanas de cotizaciones.

En su defensa formuló las excepciones de prescripción; inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez; petición antes de tiempo; compensación; buena fe; necesidad del equilibrio financiero del sistema; hecho exclusivo de un tercero; la innominada o genérica.

INVERSIONES INMOBILIARIAS REFORMANDO Y ALQUILANDO S.A.S. y FABIO GUZMÁN ECHEVERRI, pese a haber sido debidamente notificados de la demanda, no dieron respuesta a la misma.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 28 de septiembre de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que el actor tiene derecho a la pensión de invalidez, causada a partir del 16 de mayo de 2017, con fecha de disfrute a partir del 13 de septiembre de 2017, en cuantía de un salario mínimo mensual, por 13 mesadas, a cargo de Porvenir S.A., mientras subsistan las causas que dieron origen al reconocimiento; condenó a Porvenir S.A. a pagar al demandante, por concepto de retroactivo causado entre el 13 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2022, la suma de \$47.537.429, autorizando los descuentos en salud; condenó al pago de los intereses mora, sobre las mesadas causadas a partir del 12 febrero de 2018 hasta la fecha de pago de la obligación; absolvió a los codemandados Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S y Fabio de Jesús Guzmán Echeverry de las pretensiones incoadas en su contra, condenando en costas a Porvenir S.A.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

El apoderado del actor formuló recurso de apelación, solicitando se revise la liquidación del retroactivo pensional para corroborar si al demandante le fueron pagadas todas las incapacidades, ello por cuanto puede haber periodos en los cuales no se le pagó incapacidad y tendría derecho al retroactivo de la prestación, porque ya tenía estructurada la invalidez.

Demandada Porvenir S.A.

El apoderado de la AFP interpuso recurso contra la decisión adoptada por la a quo, indicando que la misma le dio valor a una prueba aportada por el demandante, como lo es la historia laboral, en la cual se hace constar que el mismo cotizó 50.4 semanas en toda su vida laboral, pasando por alto que no se puede tener en cuenta la cotización del mes de marzo del 2017, porque fue posterior a la estructuración de la enfermedad, por lo que si a las 50.4 semanas se le resta el mes de marzo del 2017, contaría el accionante con 46.4 semanas, no causando el derecho a la pensión de invalidez.

Sostiene que, en cuanto al allanamiento en mora, no hace alusión el Despacho a una prueba por medio de la cual la administradora solicitó a la sociedad demandada el pago de los periodos que se encontraban en mora y los intereses, documento que data del 9 de noviembre del 2017, de donde se deduce que la entidad nunca se allanó a la mora.

Cita la Sentencia C617 del 2001 que precisa que el sistema de seguridad social está atado a un aseguramiento, para concluir, que esos periodos en mora no permiten la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte, siendo los codemandados los responsables de cubrir los mismos.

En cuanto a la condena a los intereses moratorios, indica que la administradora negó el derecho porque el actor no tenía las semanas que se requerían para acceder a la pensión de invalidez, y, adicionalmente, actuó bajo la interpretación exegética de la norma, citando la sentencia SL 2756 del 2007,

que establece que los intereses son improcedentes cuando la entidad niega la prestación con fundamento en el tenor literal de la ley, argumento suficiente para negar los intereses, precisando que la demandada actuó de buena fe.

Finaliza solicitando que no se impongan costas a la AFP, toda vez que hay una causal legal para negar la prestación, afirmando que, si alguien debe ser condenado en costas, son los codemandados, por la falta de cumplimiento de los deberes que se imponen desde la Constitución.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados del demandante y de Porvenir S.A. El apoderado del actor indicó que Porvenir S.A. no quiere reconocer las cotizaciones que hizo el empleador, aún antes de realizar la calificación de pérdida de la capacidad laboral del actor, tal y como ocurre con el mes de diciembre del 2016, ciclo con el cual el reclamante completaría las 50 semanas de cotizaciones, en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, periodo que no fue incluido por la accionada en la historia laboral.

Aseveró que el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez, desde la fecha de estructuración de la misma, descontando las incapacidades que le fueron pagadas. Agrega que el valor que se debió reconocer, por concepto de retroactivo de las mesadas causadas entre el 13 de septiembre del 2017 y el 31 de agosto del 2022, asciende a la suma de \$55.537.429 y no a \$47.537.426 que reconoció la Juez.

La apoderada de Porvenir S.A., por su parte, expresó que según la relación de aportes que se allegó con la contestación de la demanda, el demandante cotizó 12 días por febrero de 2015, 30 días por marzo de 2015 y 11 días por abril de 2015, luego, desde febrero de 2016, con la Empresa Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S. cotizó interrumpidamente y además, con

pagos efectuados extemporáneamente, por lo que, esta empresa contravino lo establecido en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1990 de 2016 mediante el cual, el Ministerio de Salud y Protección Social, estableció los plazos para el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Indicó que en el evento en que el Tribunal, determine que le asiste derecho al demandante, deberá ser Inversiones Inmobiliarias Reformando y Alquilando S.A.S y Fabio de Jesús Guzmán Echeverry, los encargados de realizar el reconocimiento pensional, citando la sentencia del 27 de enero de 2004, radicado 20716.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el joven Luis Miguel Pérez Rueda, nació el 25 de noviembre de 1996, tal como se acredita con la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 36 del anexo 02.Demanda.pdf.

-Que el demandante se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en pensiones a través de Porvenir S.A. desde el ciclo febrero de 2015, periodo por el cual cotizó 12 días, véase folios 65 anexo 02.Demanda.pdf.

- Que Seguros de Vida Alfa S.A. calificó al demandante, el 13 de septiembre del 2017, estableciendo una pérdida de la capacidad laboral de 73.12%, estructurada el 16 de mayo del 2017, de origen común –ver folios 60 a 63 del documento 02. Demanda.pdf. -

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, determinando si el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez solicitada cumpliendo con el requisito de las 50 semanas de cotizaciones en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la misma y si puede incluirse la cotización efectuadas por el ciclo de marzo del 2017, cuyo pago se hizo de manera extemporánea?

¿Si, en caso de verificarse que el accionante tiene derecho a la prestación de invalidez, la fecha a partir de la cual se reconoció la misma corresponde a la fecha de estructuración descontando las incapacidades percibidas por el mismo?

¿Si la liquidación del retroactivo realizada por el Juzgado, se encuentra ajustada a derecho?

¿Si se configuró un allanamiento a la mora por parte de Porvenir S.A., al no ejercer acciones de cobro por lo periodos presuntamente no cancelados por el empleador?

¿Si es procedente revocar la condena al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la condena condenar en costas a Porvenir S.A.?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez, por contar con 50.4 semanas de cotizaciones en los tres años anteriores a la estructuración de la misma y 26 semanas en el último año; ii) no es posible tener en cuenta el ciclo de marzo del 2017 dentro del conteo de semanas, por cuanto el mismo fue cancelado luego de estructurado y calificado el estado de invalidez del actor; pero si el ciclo diciembre de 2016 iii) procede el reconocimiento de los intereses moratorios en favor del accionante; iv) hay lugar a la condena en costas impuesta por la a quo; v) no se encuentra ajustada la liquidación del retroactivo pensional; en consecuencia deberá modificarse el numeral segundo de la sentencia y confirmarse en lo demás, como se pasa a explicar:

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 prescribe:

“Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”

Por su parte, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el 1º de la Ley 860 de 2003, indica:

“Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo

anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-428 de 2009”.

En relación con la fecha de disfrute de la pensión de invalidez, el legislador tiene establecido como regla general que la misma debe ser percibida efectivamente a partir de la fecha en que se estructura la contingencia, momento a partir del cual el asegurado debe beneficiarse de la protección otorgada por el sistema ante una situación que lo coloca en desventaja o debilidad.

Es así como el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, establece:

“DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN. La pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructura tal estado. Cuando el beneficiario estuviera en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”

La Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ratifica el criterio de reconocimiento de la pensión a partir de la fecha de estructuración, en sentencia SL1575 del 18 de abril de 2018, radicación 58811, con apoyo en las sentencias SL12753-2014, radicación n.º52823, CSJ SL 838-2013, CSJ SL, 2 ago. 2011, rad. 39766, de la Sala Permanente, allí se expuso:

Por lo tanto, es la fecha de estructuración de la invalidez la que debe ser tomada como referente para determinar el surgimiento del derecho a la pensión de invalidez y la normatividad que lo regula. (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Esta pauta normativa, esta excepcionada en los casos en los cuales el afiliado ha disfrutado del subsidio de incapacidad, en los cuales, por disposición legal, la fecha de disfrute lo será la del último pago de incapacidad, al observarse incompatibles ambas prestaciones.

Así lo recordó la Corte Constitucional en la sentencia T140 de 2016:

“Ante este panorama normativo, se tiene que la pensión de invalidez sería incompatible con el pago de incapacidades por enfermedad temporal, habiendo lugar a solo una de estas prestaciones por la afectación del estado de salud del actor, lo que significa que no habría lugar al pago de incapacidades en los periodos que llegaren a ser cubiertos por la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración de la enfermedad de origen común ya que de lo contrario se estaría obligando a la parte accionada a hacer dos pagos por un mismo hecho, esto es, la pérdida de la capacidad laboral del afiliado.»

2.6.- CASO CONCRETO

Tal y como lo indicó la falladora de primer grado, es claro que, conforme a la fecha de estructuración del estado de invalidez del accionante, 16 de mayo del 2017, la normatividad aplicable al asunto es la Ley 860 del año 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, encontrando que el actor, en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, esto es, entre el 16 de mayo del 2014 y el 16 de mayo del 2017, de manera inicial no acreditaría las 50 semanas de cotizaciones.

En este caso Porvenir S.A., por escrito del 20 de octubre del 2017, le niega la pensión de invalidez al actor, argumentando que, para el momento de la estructuración de la invalidez, no cuenta con las 50 semanas de cotizaciones previstas en la ley –ver folio 70 del documento 02. Demanda.pdf-.

En el plenario se cuenta con tres historias laborales de actor así:

1) Expedida el 12 de octubre del 2017, en la cual se reportan un total de 46 semanas cotizadas por el actor en toda su vida laboral, registrando cotizaciones hasta febrero del 2017 –ver folios 64 a 65 del documento 02. Demanda.pdf. -

2) Expedida el 9 de julio del 2018, en la que si bien es cierto no se informa el total de semanas, si se detalla el número de días de cada ciclo y luego de la operación aritmética de rigor, se obtendría un total de 50.42 semanas cotizadas por el interesado en toda su vida laboral, registrando cotizaciones hasta marzo del 2017 –ver folios 34 a 35 del documento 13. Contestación de Demanda Porvenir.pdf.-.

3) Expedida el 6 de diciembre del 2021, en la que se indica que el actor cuenta con 50.4 semanas cotizadas en toda su vida laboral, registrando cotizaciones hasta marzo del 2017 –ver folios 4 a 5 del documento 32. Memorial Aporta Prueba Sobreviniente.pdf.-.

Nótese pues como la diferencia en las historias, radica única y exclusivamente en el hecho que, en la primera de ellas, no se incluye el periodo de marzo del 2017, por lo que reporta 46 semanas, ciclo que si es tenido en cuenta en las restantes historias que registran 50.4 semanas.

Y, como punto común, se encuentra que en ninguna de las historias se tiene en cuenta el periodo de diciembre del 2016, aspecto que será analizado a continuación.

Respecto de los periodos que fueron incluidos por la a quo, a efectos de conceder el derecho al actor, la misma adicionó los ciclos de diciembre del 2016 y marzo del 2017, para concluir que en realidad el afiliado cuenta con 54.71 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Frente a la anterior determinación, se comparte el argumento dado por el apoderado de Porvenir S.A., al momento de interponer el recurso de apelación, consistente en que el mes de marzo del 2017 no se puede incluir, por cuanto el mismo fue pagado el 20 de octubre del 2017, es decir, después de haberse calificado la condición de salud del actor (13 de septiembre del 2017) y después de estructurado el estado de invalidez (16 de mayo del 2017). En este contexto el accionante solo tendría registradas 45.11 semanas.

Ahora, frente al ciclo de diciembre del 2016, que no aparece en las historias, labores, pero fue incluido por la a quo, si bien es cierto no fue objeto de reparo por parte de la AFP en su apelación, es dable realizar mención al respecto, encontrando que el mismo debe ser contabilizado y sumado a las 46.11 semanas asentadas, en tanto se cuenta con la planilla SOI, obrante a folio 37 del documento 02. Demanda.pdf., en la cual se certifica el pago de las cotizaciones realizadas a pensiones en Porvenir S.A., por varios ciclos, entre ellos, diciembre del 2016, sin reportarse el número de días cotizados por ese riesgo, pero si por los demás correspondiendo, en efecto, a 30 días, registrando un IBL de \$659.455 y una cotización en pensiones por valor de \$110.031, con fecha de pago el 11 de abril del 2017, esto es, antes de la estructuración de la invalidez y de la calificación realizada por la aseguradora.

Así las cosas, a las 54.71 semanas encontradas por la a quo, como cotizadas por el causante en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, se le deben restar las 4.29 semanas que corresponden al ciclo de marzo del 2017, el cual como se explicó, no es dable incluir, contado el solicitante con un total de 50.42 semanas cotizadas en dicho interregno, cumpliendo de esta manera los requisitos de ley para acceder al derecho pensional.

Ahora, en cuanto al punto del allanamiento en mora que predica la Juez respecto de la AFP, es claro que el mismo no se presentó por cuanto se cuenta en el plenario con carta expedida por Porvenir S.A., fechada el 9 de noviembre del 2017 y dirigida a la demandada Inversiones Inmobiliarias Reformando y

Alquilando S.A.S., en la cual le indica que continúa en mora en el pago de los aportes de los trabajadores afiliados al fondo, pasando, a relacionar los mismos en planilla adicional, apareciendo el demandante y cobrando por éste, los ciclos de mayo, octubre a diciembre del 2016 y abril a mayo del 2017; el 11 de octubre del 2017 reitera la petición a la empleadora, pero en el detalle de los periodos adeudados a nombre del accionante, incluye los ciclos de marzo a septiembre del 2017 –ver folios 88 a 95 del documento 02. Demanda.pdf-.

Frente a este requerimiento, ha de precisarse que no tiene incidencia alguna en cuanto a las semanas reconocida al accionante y en particular el ciclo de diciembre del 2016, pues fue cancelado en data anterior al escrito referido.

Pensión de invalidez para población joven

En adición al análisis precedente, por tratarse de un punto de derecho, debe señalar la Sala que el párrafo primero del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, dispone:

“Parágrafo 1°. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. “

Puntualizando que tal disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional mediante sentencia C020 de 2015, bajo el entendido que la regla especial prevista en el párrafo 1° del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe extenderse favorablemente a la población que tenga **hasta 26 años de edad**, inclusive.

Observando que el demandante nació el 25 de noviembre de 1996 y para la fecha de estructuración de la invalidez, 16 de mayo de 2017, contaba con 20 años de edad, siéndole aplicable la disposición en comentario.

Encontrando que conforme a la historia laboral expedida el 6 de diciembre del 2021, obrante a folios 4 a 5 del documento *32.MemorialAportaPrueba Sobreviniente.pdf*, el actor acredita un total de 25.71 semanas cotizadas en el último año anterior a la fecha de estructuración, es decir, entre el 16 de mayo de 2016 y el 16 de mayo de 2017, cifra que debe ser aproximada a las 26 semanas, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia radicado SL 53440 del 11 de marzo de 2015, en la cual se rememora, a su vez, las sentencias radicación, SL 36196 de 2010, SL 40463 de 2011 y SL 38617 de 2012 y en la cual se indica:

“Esa exigencia se cumple a cabalidad por la actora, que en el año anterior a la estructuración de la invalidez, cuenta con 25,71 semanas de cotización, cifra que debe ser aproximada al número entero siguiente, vale decir, a 26 para ajustar el mínimo legal exigido según lo ha asentado esta Sala, pues en los eventos en que la fracción de semanas de cotización supera el 0.5, por razones de equidad y de justicia y para no dejar en el desamparo a una persona que padece una situación de debilidad por sus condiciones de salud, es procedente hacer tal aproximación (CSJ SL, 24 ag. 2010, rad. 39196)”

Hipótesis normativa en la cual no se requiere la inclusión de los ciclos que se encuentran en discusión en este proceso.

Se sigue de lo anterior, que si, en gracia de discusión, no fuera procedente incluir el periodo diciembre de 2016, igualmente el demandante podría acceder a la pensión de invalidez, bajo la norma especial citada.

Fecha desde la cual se tiene derecho a la prestación

Solicita el apoderado del actor en su apelación, se verifique hasta que fecha le fueron canceladas incapacidades a su representado, a efectos de determinar la fecha desde la cual tendría derecho a la prestación.

Conforme a autorizaciones dadas por Porvenir S.A. al actor, referentes al pago de incapacidades, se reportaron las siguientes –ver folios 37 a 41 del documento 02. Demanda.pdf. -:

- i) Del 6 de noviembre del 2016 al 2 de enero del 2017
- ii) Del 4 de enero al 2 de febrero del 2017
- iii) Del 3 al 17 de febrero del 2017
- iv) Del 5 de marzo al 6 de mayo del 2017
- v) Del 7 de mayo al 5 de junio del 2017

Adicionalmente se cuenta con respuesta dada por Bancolombia el 31 de marzo del 2022, frente a un oficio de prueba decretado por el Despacho, en el que certifica pagos por incapacidades hasta el 12 de septiembre del 2017, lo que llevó a que el Despacho reconociera la prestación a partir del día siguiente –ver folios 1 a 6 del documento 42. Respuesta Requerimiento Bancolombia.pdf-.

Por lo anterior, no hay lugar a modificar la fecha desde la cual fue concedida la prestación por la sentenciadora primigenia, por cuanto es claro que no podría el demandante percibir subsidio por incapacidad y mesada pensional de manera conjunta.

Sobre el retroactivo pensional

En cuanto al retroactivo liquidado por el Juzgado, no se aportó la liquidación realizada en dicha instancia y efectuada la misma por la Sala, se obtiene como valor adeudado al actor, por concepto de retroactivo pensional generado entre el 13 de septiembre del 2017 y el 30 de agosto de 2022, fecha hasta la cual lo estimó la a quo, asciende a la suma de \$55.537.429, suma superior a la determinada por la Juez, que lo fue de \$47.537.429, razón por la cual deberá modificarse el numeral segundo del fallo, procediendo a actualizarse la condena hasta el 31 de diciembre del 2022, la misma que asciende a la suma de SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$60.537.429), ordenándose que a partir del 1° de enero del 2023, se le reconozca una mesada pensional por valor de \$1.160.000.

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2017	4	\$ 737.717	\$ 3.393.498
2018	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
TOTAL			\$ 60.537.429

Intereses moratorios

En relación con los intereses moratorios, a juicio de la Sala los mismos se tornan procedentes en tanto que Porvenir S.A. incurre en mora respecto al pago de las mesadas causadas.

Recordando que la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia, en sentencias, Radicado SL 787 (46602) del 2013 y SL 16180 (45070) de 2015, entre otras, fija como pautas para la exoneración de los intereses moratorios *“eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”*, hipótesis que no corresponden al presente caso en cual la discusión gira en torno a la contabilización de las semanas cotizadas.

Subrayando que, si bien al demandante no podía incluirse el ciclo marzo de 2017, el periodo diciembre de 2016, si había sido pagado antes de la ocurrencia de la contingencia y por ende debía ser incluido en el total de semanas, periodo con el cual el pretensor acreditaba las 50 semanas legalmente requeridas, amén de cumplir con la hipótesis prevista en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, atrás referenciada.

Sobre las costas a cargo de Porvenir S.A.

En lo atinente a la inconformidad planteada por el apoderado de Porvenir S.A., frente a la condena en costas a su representada, ya que existía una causal legal para negar la prestación, se debe indicar, que tal causal no se configura, conforme se explicó en precedencia, aunado al hecho que dicha condena es una consecuencia procesal objetiva en virtud de haber sido vencida en juicio, sin que exista fundamento legal para su exoneración.

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se MODIFICA el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario instaurado por el Señor LUIS MIGUEL PÉREZ RUEDA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., INVERSIONES INMOBILIARIAS REFORMANDO Y

ALQUILANDO S.A.S. y FABIO GUZMÁN ECHEVERRI, en el sentido de indicar que el retroactivo a reconocer por concepto de pensión de invalidez causado desde el 13 de septiembre del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2022, asciende a la suma de SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$60.537.429), ordenándose que a partir del 1° de enero del 2023, se le reconozca una mesada pensional por valor de \$1.160.000.

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

3.- Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.


4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

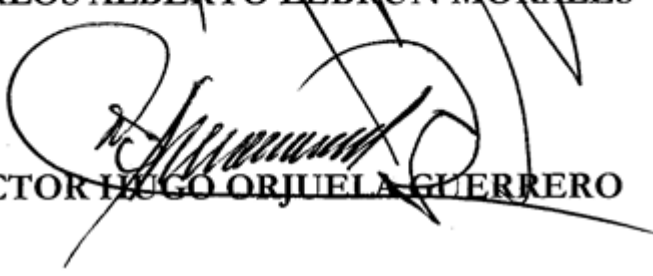
Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO